PRESENTACIÓN

Vicente J. Montes Gan*

En el albor del Siglo XXI, el solapamiento de procesos de muy distinto origen, duración e intensidad, ha conformado un mundo, como nunca antes, complejo, convulso e interdependiente. Enmarcado en un trasfondo de cambio de era, el «Fin de la era de Occidente» como ha venido en llamarse, son muchos los factores transformadores que condicionan hoy el escenario de actuación de los ciudadanos y de las instituciones, en general, y de la gobernanza, en particular.

El intenso y disruptivo proceso de innovación y liberalización ha alterado las reglas del juego, exigiendo nuevos liderazgos con la capacidad de adaptación que requiere un entorno de cambios exponenciales, más difíciles de predecir y de mayor impacto socioeconómico. El ejercicio del gobierno y la administración de los asuntos públicos no son ajenos a este proceso. La Administración Pública debe adaptarse a los nuevos vectores de cambio para mantener su papel vertebrador de la sociedad, clave para asegurar e incluso ampliar los niveles de cohesión económica y social alcanzados.

Los dirigentes públicos deben liderar ese proceso de adaptación. Max Weber definía al servidor público como un líder innovador fiel al servicio público y a la virtud de la eficacia. Ha transcurrido un siglo desde que el filósofo alemán enunciara esta definición, pero esos valores —liderazgo, eficacia y fidelidad a la defensa del interés general de los ciudadanos— siguen vigentes y deben caracterizar a las personas que gestionan los asuntos públicos, aunque el contexto haya cambiado.

Con este monográfico, *Información Comercial Española* contribuye a fomentar el diálogo sobre la necesaria adaptación de la Administración Pública a los principales cambios disruptivos que enfrenta la sociedad actual, una adaptación que debe conducir a una administración más innovadora, abierta y eficaz, capaz de atender las nuevas demandas ciudadanas.

Manuel Muñiz abre el monográfico con un trabajo introductorio sobre el futuro del gobierno y de la acción pública. Tras analizar el ritmo de cambio de la sociedad y sus consecuencias en términos de erosión de las clases medias en Occidente y de radicalización política, viene a reivindicar la revisión de la arquitectura liberal construida desde los años cincuenta mediante la construcción de un nuevo contrato social al que debe ir unido la permanente adaptación del gobierno y la acción pública a los cambios profundos mencionados.

---

* Técnico Comercial y Economista del Estado.

Conformado el escenario de cambio disruptivo, **Víctor Pérez-Díaz** profundiza en el análisis de las principales transformaciones obradas en la sociedad y en las nuevas demandas de la ciudadanía en la economía digital. En su artículo, tras explorar algunos factores culturales que dificultan la capacidad de adaptación de las sociedades occidentales a la crisis económica, social, política y cultural actual, analiza las demandas y capacidades cívicas de hoy así como las opciones alternativas de futuro que enfrenta la sociedad, entre las que ésta tendrá que optar, conduciéndose a sí misma hacia la prosperidad o hacia su destrucción.

El liderazgo del cambio en la Administración Pública es analizado en el trabajo de **José Ramón Pin** y **Pablo García-Manzano**, que defienden la profesionalización de los cuadros de la Administración y delimitan el perfil del directivo público, sus competencias, formación y experiencia necesarias para ejercer la administración de los asuntos públicos y la acción de gobierno. Este liderazgo público se articula en España alrededor de dos colectivos, los responsables políticos y los administradores públicos profesionales. **Carles Ramió** y **Victòria Alsina** analizan en su artículo la relación entre ambos grupos, los directivos políticos y los profesionales. Tras la identificación de los diferentes perfiles existentes dentro de ambos grupos, el estudio de las interacciones entre ellos en términos de rendimiento institucional permite llegar a conclusiones relevantes sobre la necesidad de potenciar unos determinados perfiles directivos políticos y profesionales y de mejorar la regulación de la dirección pública profesional.

La necesaria reforma de la regulación económica en la sociedad digital es el centro de atención del trabajo de **Antonio Maudes** y **Mateo Silos**. Enfrentados a las características de la nueva economía, plantean una nueva regulación económica, más eficiente, apoyada en autoridades independientes de productividad. Los autores destacan las relevantes oportunidades que ofrece la disrupción digital para el funcionamiento interno del sector público y la intervención pública en los mercados.

Isaac Martín-Barbero describe un nuevo modelo de apoyo público a la empresa basado en la innovación y la globalización. En su reflexión sobre el mundo que viene, el autor describe los avances recientes alcanzados en materia de internacionalización empresarial y enuncia algunos principios inspiradores que deberán guiar la acción pública en los años venideros para contribuir a consolidar una estructura empresarial con la capacidad de generar mayor valor y prosperidad.

Jorge Martínez-Vázquez y **Jorge Onrubia** analizan la estructura de gobierno española y proponen una reforma de la misma, en sus distintos niveles, que permita responder con mayor eficiencia y equidad a los nuevos *shocks* económicos y a los cambios experimentados por la sociedad. En su artículo exponen las grandes líneas de reforma del sector público, en concreto, el nivel y composición del gasto, el sistema fiscal, el modelo de descentralización fiscal, y la gobernanza del sector y de la gestión pública.

Dos bienes públicos fundamentales, como son la justicia y la educación, determinantes para asegurar la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, son el foco de atención de los dos artículos siguientes. **Fernando Iurzun** describe en su trabajo

los males perennes de nuestra justicia: lentitud, falta de previsibilidad de la respuesta judicial, ¿politización?, etc., pero también identifica las causas de esos males y aventura algunos remedios, comenzando por la organización de la justicia, la reordenación de las competencias, la dotación de recursos y su asignación eficiente, la reducción de la litigiosidad, la urgente digitalización de los servicios judiciales, la reforma del sistema de nombramientos en los destinos de la carrera judicial o la evaluación de las leyes procesales y su revisión inteligente. **José García Montalvo** analiza las debilidades del sistema educativo español y los logros alcanzados en los últimos años que, sin embargo, han provocado disfunciones en el sistema y resistencia al cambio. Sin dejar de lado los retos educativos de España en el contexto tecnológico disruptivo, el autor destaca ciertas cuestiones sobre cuya eficacia existe consenso en este campo: la intervención temprana del sistema educativo y la calidad de los profesores. Asimismo, analiza otros aspectos como la autonomía de los centros, a fin de lograr una mayor flexibilidad y adaptación al cambio de los mismos, lo que requiere el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas y de evaluación externa que debe convertirse en una de las piedras angulares de la reforma.

Como conclusión del monográfico, **Javier Andrés** y **Rafael Doménech** proponen un sector público facilitador de un crecimiento económico socialmente inclusivo, haciendo especial mención al nivel de renta per cápita y a su distribución. Asimismo, analizan la importancia de la intervención pública directa —a través de la provisión de bienes y servicios públicos, y su financiación— e indirecta —mediante regulaciones que afectan al funcionamiento de los mercados en los que interviene el sector privado—. Su conclusión es que el principal reto de las administraciones públicas españolas en las próximas décadas será mejorar su eficiencia, adaptar el Estado del bienestar a los cambios demográficos, económicos y sociales, aprovechar la transformación tecnológica y digital para proporcionar mejores servicios y converger hacia la frontera de las mejores prácticas internacionales en este ámbito.

En resumen, la Administración Pública en el Siglo XXI deberá ser eficaz, transparente y flexible; instrumentada de manera creciente a través de las nuevas tecnologías disruptivas y dirigida por líderes públicos sometidos a los incentivos adecuados, capaces de comprender y atender las nuevas demandas sociales surgidas de un entorno de cambio exponencial. La gestión eficiente de los asuntos públicos exigirá que políticos, funcionarios profesionales y ciudadanos cambien su perspectiva, haciendo suyo el objetivo del bien común actuando sobre bases realistas como corresponsables de un proyecto compartido: el bienestar social y la prosperidad en un mundo muy distinto del que conocemos.